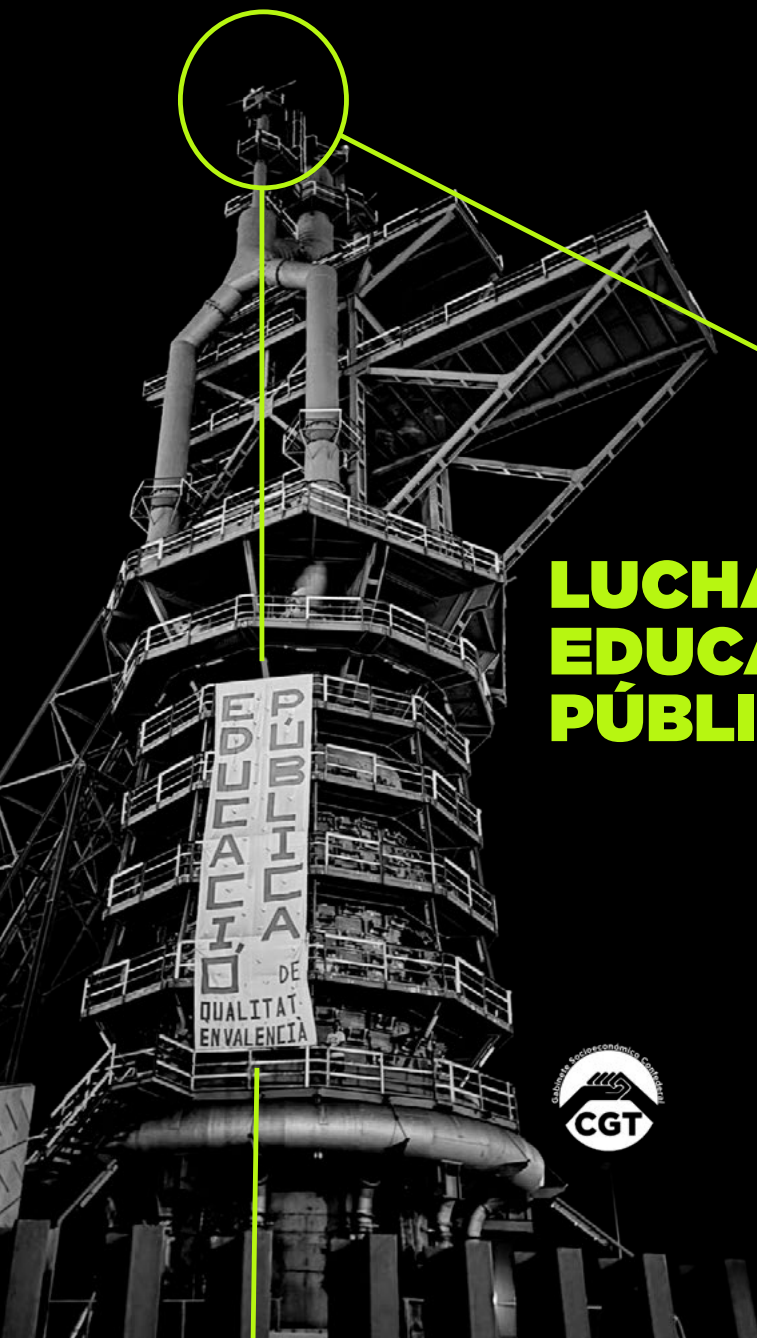


Octubre 2026 – n.º 47

LA BRECHA

ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL



EDUCACIÓN
PÚBLICA
DE
QUALITAT
EN VALENCIA

LUCHAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA



LA BRECHA

n.º 47

Octubre 2026



LUCHAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Durante los últimos meses, distintos territorios del Estado han vivido importantes procesos de movilización en defensa de la educación pública. Aunque estas movilizaciones han tomado forma en contextos diferentes, se oponen a problemáticas similares, como la falta de recursos y personal, las ratios elevadas, la sobrecarga de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las infraestructuras o los procesos de privatización y segregación. Además, estas luchas comparten una apuesta por enraizar y sostener las movilizaciones desde los propios centros a través de asambleas, coordinadoras, plataformas y redes territoriales que buscan convertir el malestar de la comunidad educativa en fuerza colectiva organizada desde abajo.

¿Qué podemos aprender de estos conflictos? ¿Cómo se construye organización cuando las bases están debilitadas y muy fragmentadas? ¿Qué capacidad de presión puede ejercerse contra las administraciones públicas y cómo se sostiene una lucha durante meses? Para acercarnos a estas preguntas, hemos hablado con participantes en las movilizaciones de Aragón, País Valencià, Catalunya y Madrid.

Los textos publicados en *La Brecha* reflejan exclusivamente la opinión de sus autorías, la cual no tiene por qué coincidir con la posición de CGT al respecto.

CUATRO TERRITORIOS, UN MISMO MALESTAR

Es evidente que el ataque a la educación pública —en todas sus etapas— es un rasgo común que se extiende por todo el Estado. Las movilizaciones que se han producido no han sido procesos idénticos ni se han dado ante las mismas condiciones políticas y organizativas (por ejemplo, enfrentan administraciones gobernadas por partidos distintos), pero al ponerlas en paralelo aparecen conexiones que permiten entender por qué la educación pública se ha convertido en un terreno de conflicto.

En Aragón, el detonante fue el anuncio de la concertación del Bachillerato el pasado otoño. Como explica Fran Garayoa, de CGT Enseñanza Aragón, esta medida resultaba especialmente difícil de justificar en un contexto de descenso de la población escolar y con más de 2.000 plazas libres en Bachillerato en los centros públicos. Pero el conflicto pronto desbordó esa cuestión y puso sobre la mesa otras carencias: «más horas de atención al alumnado, más personal no docente para los centros, dinero para el mantenimiento de los mismos, climatización, o el rechazo a la dualización de la FP...». Todo esto provocó una primera huelga de tres días impulsada por CGT a finales de enero que sacó a la calle a miles de personas, y unas nuevas jornadas de huelga y movilización el 19 y 20 de mayo. En paralelo, se consiguió detener por la vía jurídica, al menos de momento, la concertación del Bachillerato. Si bien se reconocen estos logros como fruto de las luchas que se impulsaron el pasado curso, lo cierto es que la falta de recursos y la situación de la educación pública obligan a permanecer con el conflicto abierto.

En cambio, en el País Valencià, el punto de partida fue una tabla reivindicativa más amplia, que incluía la bajada de ratios, menos burocracia, más personal de apoyo, mejores infraestructuras e incrementos salariales, así como la defensa del valenciano. Después de varias huelgas previas, la ausencia de voluntad política y la negativa a negociar desembocaron en mayo en una huelga indefinida que se prolongó durante más de un mes. Aunque las principales reivindicaciones siguen sin resolverse, la experiencia dejó una estructura organizativa que ha permitido mantener abierto el conflicto y retomar las movilizaciones durante este nuevo curso.

El conflicto de Catalunya comparte buena parte de estas demandas, pero tiene como uno de sus ejes centrales la financiación y las dotaciones de la educación pública. Las organizaciones movilizadas, empujadas por CGT Ensenyament, reclaman que los compromisos y anuncios del Govern se traduzcan en recursos concretos y mejoras efectivas en los centros. Esto pasa por incrementar las plantillas docentes y de personal de apoyo, reforzar los equipos que atienden las necesidades de inclusión y reducir la carga burocrática, pero también por recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales, no solo de los y las docentes, sino de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en los centros educativos, como el personal de atención educativa o el personal de ocio y tiempo libre.



A ello se suma la reivindicación de internalizar servicios que actualmente se encuentran externalizados, como determinados servicios de los centros, y de reforzar el personal de administración. La cuestión no es únicamente cuánto se anuncia que se va a invertir, sino cuándo, cómo y en qué se concreta ese incremento de recursos. En palabras de Laura Gené, secretaria general de Ensenyament de CGT Cataluña, «ya basta de titulares, queremos calendario, queremos cifras y, sobre todo, queremos negociación con el comité». El conflicto ha puesto también en primer plano la importancia de la organización desde los propios centros, las asambleas de centro y de zona. Así, la movilización no se ha limitado al profesorado, sino que ha buscado incorporar al conjunto de trabajadoras y trabajadores que sostienen cotidianamente la educación pública.

Asimismo, en Madrid se inaugura un otoño de luchas. Las reivindicaciones siguen poniendo en el centro cuestiones como las ratios, las horas lectivas, plantillas, salarios e infraestructuras, pero incorporan con especial fuerza la lucha contra la segregación educativa. A pesar de los cuatro años de lucha que llevan encima, la firma del Acuerdo de la vergüenza¹, firmado por los sindicatos de la mesa sectorial y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, obliga a seguir manteniendo el pulso e intensificar el conflicto hacia la huelga indefinida que comienza el 14 de octubre. Como explican desde Menos Lectivas, «no hemos conseguido lo que demandábamos, y en ese sentido el conflicto no ha terminado», aunque señalan avances como la reactivación del profesorado y la creación de una red de asambleas de centro por toda la región que ha permitido mantener el conflicto latente.

1 El 19 de marzo de 2025, CCOO, UGT, ANPE y CSIF firmaron un acuerdo en la mesa sectorial denominado *el acuerdo de la vergüenza*, ya que la CGT considera que perpetúa los recortes, precariza las condiciones laborales y consolida la privatización y segregación en la educación pública madrileña al no recuperar el horario lectivo previo a la crisis de 2012 ni dotar de recursos suficientes a la atención a la diversidad.



**LAS MOVILIZACIONES
HAN ABIERTO UN CAMINO,
HAN PUESTO LADRILLOS
QUE VAN A PERMANECER
MÁS ALLÁ DEL
CICLO DE LUCHA**

DE LA INDIGNACIÓN A LA ORGANIZACIÓN

¿Cómo se consigue que un malestar que está presente en muchos centros y que se vive muchas veces desde la resignación se convierta en capacidad colectiva de movilización? Las experiencias de estos cuatro territorios apuntan, con fórmulas diferentes, a una organización desde los centros y a construir espacios de base donde las trabajadoras puedan encontrarse, compartir los problemas y sus diagnósticos, y decidir cómo afrontarlos. Las asambleas aparecen como el punto de encuentro que ha permitido construir y sostener las movilizaciones. No se trata únicamente de convocar a una manifestación o incluso a una huelga, sino de generar espacios asamblearios donde las que trabajan en la educación puedan reconocerse como parte de un mismo conflicto. Como resume Héctor, profesor en educación secundaria en el País Valencià, «la clave de la huelga indefinida, y, como toda lucha obrera que reclama unas mejoras en el sistema, han sido las asambleas, no hay otro secreto».

Estos espacios de base surgen, sin embargo, de forma diferente. En Aragón, parten en buena medida de estructuras sindicales de CGT ya existentes, pero se amplían mediante asambleas abiertas por barrios y localidades, haciendo hincapié en que se trataba de una cuestión de toda la comunidad educativa. En el País Valencià, las propias asambleas se coordinaban entre sí a través de una Coordinadora d'Assemblees. Allí, después de que cada centro crease su asamblea, se elegía un representante que mantenía la comunicación con el resto, llegando a conseguir que la Coordinadora tuviera capacidad de decisión: «se consiguió que tuviéramos voz todos los docentes en todas las decisiones que se estaban negociando». Mientras que en Catalunya, «las asambleas de centro y de zona permitieron recuperar redes construidas en movilizaciones anteriores», en Madrid, la reconstrucción de las asambleas a través de Menos Lectivas, plataforma amplia de base asamblearia, se organiza a través de «grupos naturales de afinidad: gente con la que tomas el café, con la que compartes una guardia, con la que compartes un equipo directivo difícil». A partir de estos pequeños grupos, las asambleas se van ampliando mediante acciones concretas y espacios de coordinación.



Si bien cada territorio ha ido construyendo sus bases organizativas a través de distintos mecanismos, lo cierto es que el empuje y el peso de CGT en todos estos procesos, y la capacidad de adaptarse a nuevas fórmulas organizativas, han sido elementos comunes que han marcado la diferencia con movimientos de años anteriores. Las experiencias recogidas muestran que no hay una única receta. Los sindicatos pueden aportar capacidad de convocatoria, recursos, experiencia y herramientas de negociación, pero las plataformas y las asambleas permiten ampliar la participación y, sobre todo, que las decisiones no queden alejadas de quienes están sosteniendo el conflicto.

Laura Gené subraya que «no se trata de que los acuerdos los tomen las organizaciones sindicales y luego los trasladen a las trabajadoras, sino que las trabajadoras tienen que participar y decidir». Que la capacidad de decisión sobre el conflicto se desplace de las cúpulas sindicales a las plantillas no solo ha democratizado el proceso de lucha, sino que le ha dado mucha fuerza, y ha quitado poder a los sindicatos de concertación. La administración ya no tiene que convencer, en un despacho a puerta cerrada, a las representantes sindicales, sino que lo que propongan ha de satisfacer a las plantillas movilizadas.

Además, resulta interesante que organización y unidad aparecen estrechamente relacionadas. Más allá de sumar siglas, el objetivo es conseguir que personas y colectivos diferentes puedan reconocerse en un conflicto común. Para ello ha sido clave impulsar acciones comunes y facilitar la incorporación en ellas de quienes no tenían experiencia sindical. Una unión entendida no solo como acuerdo entre sindicatos de clase, sino como una movilización que quienes participan sienten como propia.

En definitiva, la democratización de la toma de decisiones y de la orientación de los procesos, y la participación directa, sin mediaciones, en la propia lucha, se han revelado como condición necesaria para amplificar sustancialmente la potencia y la capacidad de sostener los conflictos.

MÁS ALLÁ DE DESPERTAR LA MOVILIZACIÓN: CÓMO PRESIONAR DE MANERA EFECTIVA

Una vez construida una base organizativa con capacidad de visualizar el conflicto y elevarlo, otra pregunta que planteamos es: ¿cómo se consigue que toda esa fuerza obligue a la administración a responder? Porque a diferencia de una empresa privada, donde la huelga perjudica de forma directa a los beneficios, las huelgas educativas no afectan a la sostenibilidad inmediata de las administraciones.

Una primera clave que subrayan desde estos territorios es conseguir que el conflicto sea imposible de ignorar, convertirlo en una disputa social que vaya más allá de los centros educativos. Para ello, es fundamental ampliar el campo de movilización. En Madrid han trabajado especialmente la comunicación con las familias y la ciudadanía partiendo de la idea de que «gran parte de nuestra capacidad de presión [...] reside en la capacidad de comunicación» y en mostrar que «las condiciones laborales de las docentes coinciden con las condiciones de aprendizaje del alumnado». De esta forma consigues que el conflicto sea entendido como un problema social y colectivo. En el País Valencià, esa presión se llevó hasta sus últimas consecuencias con una huelga indefinida: «Declarar una huelga indefinida les hizo daño», frente a unas huelgas de un día que, en su valoración, «no sirven para nada».

En Aragón se destaca, en la misma línea, la importancia de lograr visibilización mediática. Se trata, en parte, de convertir ese conflicto en presión y daño, que tenga efectos en el horizonte electoral de los gobiernos. Esta capacidad de presión se acentúa en los periodos en los que las elecciones están más próximas.

Pero también es importante ampliar el repertorio de movilizaciones y acciones. En Catalunya explican que ha sido clave alternar las jornadas de huelga por territorios, combinando con algunos días de movilización conjunta. Así han podido mantener el conflicto en el foco de forma continuada, a la vez que lo han hecho más sostenible a nivel económico y emocional para las plantillas. Asimismo, la realización de acciones novedosas más allá de la huelga, como el **bloqueo de la Sagrada Família** o de la Casa Batlló, facilita atraer la atención mediática y también genera una presión renovada sobre la administración, que tiene que soportar las quejas de los turistas y las empresas afectadas.



Por último, mantener un conflicto en el tiempo exige cuidar la propia organización. El desgaste con el paso del tiempo obliga a tomar medidas preventivas; desde Madrid señalan que «es fundamental la rotación de las personas que sacan el trabajo militante». La presión efectiva no consiste en el volumen de acciones, sino en construir organización y fuerza capaz de sostener, ampliar y presionar para que el conflicto sea la herramienta para transformar y revertir la situación.

ESTO NO HA TERMINADO. SEGUIR EMPUJANDO HASTA TERCER EL BRAZO

¿Qué balance cabe hacer de estas movilizaciones? Ninguna de ellas ha concluido todavía con una victoria general, y los cuatro territorios parecen estar retomando las movilizaciones después del parón del verano. Esto puede llevar a pensar que estos procesos de lucha han fracasado, pero, aunque quede camino por recorrer y aprendizajes por realizar, sería un error llegar a esa conclusión. De hecho, desde el conjunto de territorios se coincide en señalar que, aunque el conflicto no esté resuelto, el balance es positivo. Por un lado, porque, en el camino, las movilizaciones han ido arrancando conquistas que, aunque a veces pasen desapercibidas o se presenten como parciales, no se habrían logrado sin la lucha. En Cataluña, por ejemplo, se ha logrado un aumento presupuestario en materia de salarios, han aumentado las dotaciones para la educación inclusiva, y se ha conseguido la reclasificación laboral del personal de atención educativa (PAE), mientras que en Madrid han comenzado las negociaciones con la Consejería de Educación para un nuevo acuerdo sectorial, que llevaban años estancadas.

Pero, sobre todo, el balance es positivo porque las movilizaciones en estos territorios han abierto un camino y han puesto ladrillos que van a permanecer más allá del ciclo de lucha. A raíz de las movilizaciones, muchos trabajadores y trabajadoras se han organizado, han trazado vínculos en sus centros, se han afiliado al sindicato y han ganado una experiencia en la lucha que permitirá que en el próximo conflicto se parta de un lugar diferente. Muchos de los problemas que padecían, como la sobrecarga

de trabajo, se han desnaturalizado, y en muchos lugares se ha logrado tejer una red de asambleas donde las militantes se involucran en la toma de decisiones y donde sienten la responsabilidad de luchar por sus propias condiciones laborales. En el mismo sentido, los procesos de lucha han cambiado el propio tablero educativo: han obligado a otros actores a redefinirse, arrastrando, por ejemplo, a los sindicatos de concertación a una posición más combativa.

Ante el nuevo curso que se ha iniciado, el futuro queda abierto. Los trabajadores y trabajadoras debaten sobre los próximos pasos y reactivan movilizaciones —en Madrid el 14 de octubre comienza una huelga indefinida—, mientras que en otros territorios, como **Andalucía**, se preparan también jornadas de huelga. La mayoría de las demandas planteadas están todavía por conquistar, pero los trabajadores y trabajadoras del sector educativo avanzan habiendo ganado ya mucho en el proceso ●●

**LA PRESIÓN EFECTIVA
NO CONSISTE EN EL
VOLUMEN DE ACCIONES,
SINO EN CONSTRUIR
ORGANIZACIÓN Y FUERZA
CAPAZ DE SOSTENER,
AMPLIAR Y PRESIONAR**

La Brecha es una publicación económica y sociolaboral mensual del Gabinete Socioeconómico Confederal que tiene como objetivo plasmar las distintas realidades y problemas de la clase trabajadora.

A través de esta, aportamos estudios sectoriales, análisis de coyuntura socioeconómica y temas relacionados con la acción sindical.

Puedes seguir todas nuestras comunicaciones a través del canal de difusión de Telegram y por Bluesky.



Telegram



Bluesky

QUALITAT
EN VALENCIÀ

